

 <b>ALCALDÍA DE FUNZA</b>	<b>DIRECTRIZ INSTITUCIONAL DE CONCILIACIÓN - PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO</b>  <b>22-DIC-12</b>
<b>Fecha y acta de aprobación del comité de conciliación</b>	<b>21 de mayo de 2025</b>
<b>Objetivo de la directriz</b>	Prevención del daño antijurídico por la interposición de acciones de tutela por la presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso dentro del trámite contravencional iniciado con ocasión a la imposición de una orden de comparendo.
<b>Directriz de conciliación</b>	<p>La alcaldía municipal prevendrá la interposición de acciones de tutela por la presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso, frente a las causas ya nombradas así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Expedición de la Guía para la Prevención del Daño Antijurídico específica para la Alcaldía de Funza, en la que se desarrollen el tema de acciones de tutela.</li> <li>• Capacitación a los actores viales que hacen parte de la administración, sobre el procedimiento administrativo contravencional.</li> <li>• Socialización de los canales de atención y recepción de PQR's indicando las facultades y competencia de EMTRA y de las secretarías involucradas.</li> </ul>
<b>Causa general</b>	Vulneración al derecho fundamental del debido proceso dentro del trámite administrativo sancionatorio
<b>Sub causa</b>	Presentación de acciones de tutela contra la entidad por la presunta vulneración del derecho al debido proceso.
<b>Problema jurídico</b>	¿Es la entidad responsable de vulnerar el derecho fundamental al debido proceso dentro del trámite administrativo sancionatorio adelantado con ocasión a la imposición de una orden de comparendo?
<b>Tesis o respuesta</b>	<p>La respuesta depende de lo siguiente:</p> <p>Si, si la Secretaría de Movilidad no adelanta el procedimiento sancionatorio de conformidad con el Código Nacional de Tránsito y normas concordantes, para el efecto, se debe establecer si existen los presupuestos para que se ordene la caducidad de la acción por contravención a las normas de tránsito, en caso de tener que surtir nuevamente el procedimiento.</p> <p>En conclusión, la entidad si será directamente responsable por la vulneración de derechos fundamentales dentro de los procedimientos realizadas por los</p>

	empleados sobre este tema, y de los efectos jurídicos desfavorables que la omisión produzca.
<b>Condiciones de aplicación de la directriz</b>	<p>Las directrices enunciadas anteriormente serán aplicadas en todos los casos, con el fin de evitar que no se responda o trámite en tiempo una solicitud que verse sobre el problema jurídico.</p> <p>Lo anterior sin perjuicio de adelantar acción repetición, cuando se demuestre el detrimento patrimonial por la vulneración de derechos fundamentales en el trámite contravencional, por culpa imputable a los funcionarios adscritos a la entidad.</p>
<b>Fuentes jurídicas</b>	<p><b>a. Régimen normativo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución Política de Colombia <ul style="list-style-type: none"> <li>• Decreto 2591 de 1991 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 769 de 2002</li> <li>• Ley 1310 de 2009</li> <li>• Ley 1383 de 2010</li> <li>• Ley 1437 de 2011</li> <li>• Ley 1811 de 2016</li> <li>• Ley 2197 de 2022</li> <li>• Ley 2283 de 2023</li> <li>• Ley 2251 de 2022</li> <li>• Ley 1696 de 2013</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>b. Jurisprudencia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentencia C-633 de 2014</li> <li>• Sentencia C-107 de 2021</li> </ul>
<b>Vigencia de la directriz</b>	26 de mayo de 2025